

Rebelión de los Generales: Un estudio de caso sobre la ética profesional

Martin L. Cook

Tomado de la revista Parameters, número de primavera de 2008.

Este artículo está basado en las presentaciones del autor expuestas en el Seminario de la Interuniversidad sobre las Fuerzas Armadas y la Sociedad el 27 de octubre de 2007 y en el Simposio sobre la Ética Militar en la Universidad de San Diego el 25 de enero de 2008.

“Veamos a quiénes tenemos aquí esta noche. El General Moseley, Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de EUA. El General Peter Pace, Presidente de los Jefes de Estado Mayor Conjunto. Ellos siguen apoyando a Rumsfeld. Cierto, ¿todavía no se han retirado, verdad? Correcto, todavía siguen apoyando a Rumsfeld. Miren, dicho sea de paso, tengo una teoría de cómo lidiar con estos generales retirados responsables por todos estos problemas: ¡no los dejen jubilarse! Por favor, por eso tenemos un programa para detener la pérdida de tropas; usémoslo con estos tipos”.

—Stephen Colbert, Comediante, Cena de periodistas de la Casa Blanca 2006

EL HECHO DE que se pueda decir una broma como esta frente a un público incluyendo al Presidente, al Presidente de los Jefes de Estado Mayor Conjunto, al Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Aérea y frente a muchos otros dignatarios en Washington dice mucho de la relación que existe entre los líderes militares de mayor antigüedad y sus superiores civiles. Evidentemente, para que los generales recientemente retirados decidieran criticar en público al Secretario de Defensa Ronald Rumsfeld (y como se entiende

la política de Irak), la situación ha llegado a un punto donde consideraron que su discrepancia era parte de su obligación a la profesión de las armas y a los ciudadanos estadounidenses. Tal marcado criticismo por parte de los autoridades militares quienes previamente ocuparon puestos de gran responsabilidad en la implementación de las políticas de la Administración es algo que muy pocas veces se ha dado en la historia de Estados Unidos. En este artículo se intentará evaluar las consideraciones éticas que llevan a los oficiales a contemplar tal acción en toda crisis civil-militar.

Profesionalismo militar

La pregunta sobre la naturaleza del profesionalismo militar y las exigencias características derivadas de sus obligaciones profesionales han recibido un considerable estudio en los últimos años. Hasta ahora, la mayor contribución aportada a esta discusión la ha realizado el Ejército, en un proyecto sobre el Profesionalismo del Ejército desarrollado en West Point el cual culminó con la publicación de *The Future of the Army Profession*.¹ El ímpetu de ese proyecto y una serie de artículos relacionados surgió por el temor de que los oficiales del Ejército estuvieran perdiendo el sentido de su profesión y obligaciones arriesgando a convertirse, según las palabras del Dr. Don Snider, director del proyecto, en “una burocracia simplemente obediente”.

Frente a ese riesgo percibido, Snider (y muchos otros autores en el proyecto) hacen un llamado a dar un sentido renovado a las características distintivas de una profesión, incluyendo el compromiso con un cuerpo de conocimiento abstracto que la profesión está obligada a poner

El doctor Martin L. Cook es Profesor de Filosofía y asistente del Director de Departamento de la Academia de la Fuerza Aérea de EUA. Previamente ha enseñado en la Escuela Superior de Guerra del Ejército de EUA, la Universidad

de Santa Clara, el Colegio de William y Mary, Gustavus Adolphus College y St. John's College. Tiene a su haber una Maestría y Doctorado de la Universidad de Chicago y una Licenciatura de la Universidad de Illinois.

en práctica y a perfeccionar. Ese conocimiento, manifiesta el autor, constituye la experiencia singular de la profesión y el compromiso con la misma, el criterio de la independencia intelectual requerida de la profesión.

Una implicación de esa línea de pensamiento era que los integrantes de la profesión tienen la responsabilidad ética de poner en práctica el conocimiento profesional actual al grado máximo posible cuando se enfrentan con desafíos operacionales, manteniendo la capacidad de adaptar ese conocimiento a novedosos requerimientos y exigencias operacionales. En vista de que el estudio del proyecto está vinculado a la teoría específica de profesiones desarrolladas por Andrew Abbott, quien percibe la profesión como diacrónicamente involucrada en una lucha por la “jurisdicción” profesional, este aspecto del estudio destacó la necesidad de toda profesión de “adaptarse o morir” mientras evoluciona en competencia con otros actores en la experiencia relevante de su propia rama histórica de experiencia.²

Del otro lado de este debate, había una percepción en la administración del Presidente Clinton de que un buen número de militares fueron irrespetuosos con la personal del Presidente, desaprobando el uso de fuerza militar ordenado por el mismo, especialmente en la Península de los Balcanes. Tales intervenciones colocaron a la institución castrense en un rol que muchos, dentro de la profesión, consideraron fuera de lugar para una organización militar concentrada en “pelear y ganar las guerras estadounidenses” (lo que en ese entonces el Jefe de Estado Mayor, General Eric Shinseki se refirió como “el contrato no negociable del Ejército con los ciudadanos estadounidenses”).

En ese ambiente fue que varios escritores plasmaron la voz de alarma en sus escritos en cuanto a que la subordinación esencial de los militares al liderazgo civil era cuestionable. Los escritos más exhaustivos y estridentes de este análisis fueron los de Thomas Ricks en su novela *A Soldier's Duty*, en el cual imaginó la evasión deliberada de las órdenes por parte de



(Fuerza Aérea de EUA, Sgto. 2º Sean P. Houlihan)

El honorable Donald H. Rumsfeld (derecha), Secretario de Defensa de EUA, y el General Peter Pace (izquierda), Cuerpo de Infantería de Marina de EUA, Presidente de los Jefes de Estado Mayor Conjunto, responden preguntas formuladas durante una conferencia de prensa en el Pentágono, 29 de noviembre de 2005.

los militares emitidas por sus superiores y del profesor Richard H. Kohn en la Universidad de Carolina del Norte.³

Más recientemente, varias voces han planteado el argumento de que el asesoramiento profesional militar no fue tenido en cuenta por los líderes civiles de la Administración de Bush.⁴ La preocupación era prácticamente contraria a la expresada durante los años de Clinton. En lugar de elegir la insubordinación, el reclamo era que, al diferir con las firmes convicciones del secretario Rumsfeld y otros en la jerarquía con respecto a las nuevas formas de pelear las guerras, el liderazgo militar había aceptado los planes de guerra y el número de tropas en contrario al juicio de sus mejores profesionales.⁵

Fue en este contexto que varios escritores argumentaron que el proceso de supervisión del Congreso en cuanto a los asuntos militares se había quebrado de mala manera, por dos motivos: En los últimos años el Congreso había abdicado, en gran medida, su responsabilidad, y la cultura del cuerpo de oficiales había desarrollado un sentido excesivo de obligación por parte del Poder Ejecutivo del gobierno, ignorando su igual por no decir mayor, responsabilidad, de proveer al Congreso evaluaciones militares directas y honestas.⁶ Eso, estos autores argumentaron, es porque se parte de la base de que parte de la obligación profesional de un oficial superior es dar su opinión profesional en forma objetiva y sin adornos a los integrantes del Congreso y en a sus audiencias públicas.

Durante casi una década, el libro *Dereliction of Duty* de H. R. McMaster ha informado en forma importante el *ethos* y la autocomprensión del cuerpo de oficiales.⁷ La demostración de McMaster sobre la complicidad de los Jefes de Estado Mayor en la formulación y continuación de políticas erradas en Vietnam ha servido de advertencia en muchas mentes de cuidadosos oficiales. Según el general Anthony Zinni, ex comandante del Comando Central de EUA, “(en ese entonces, Presidente de los Jefes de Estado Mayor), el General Hugh Shelton envió unas copias del libro de McMaster a todos los generales de la institución castrense estadounidense”.

El mensaje para nosotros, después de escucharlo de Hugh Shelton, es que eso jamás sucedería aquí. Y el mensaje para

nosotros del secretario (William S.) Cohen en ese momento también es que la puerta siempre estará abierta, y la obligación con el Congreso, la cual es una obligación con los ciudadanos estadounidenses que es decirles lo que piensan, sigue en pie. Y eso es lo que esperamos. No quiero volver a escuchar que teníamos un problema, un poco atorado en la garganta, que no les informamos, que no expresamos honestamente si considerabamos que teníamos que decirlo.⁸

Según Richard Kohn resume la “lección aprendida” del análisis de McMaster, “Había una profunda amargura sobre Vietnam y la manera en que los jefes (de los servicios) habían sido cooptados... (Oficiales del Ejército) dijo, “Jamás lo volveremos a permitir, no dejaremos que los civiles nos pongan otra vez en esa situación”.⁹

Una nueva dimensión surgió de este debate hace dos años con el criticismo del público en cuanto a la política de la Administración y del secretario Rumsfeld, sobre todo por parte de un número de oficiales generales recientemente retirados. En casi todos los casos estos oficiales habían estado en el círculo interno de la formación y ejecución de la política de la Administración.¹⁰

Este nivel de criticismo público y discrepancia por parte de un número tan grande de líderes militares en puestos de gran importancia inmediatamente después de haber completado su servicio no tiene precedentes. Jamás en la historia de Estados Unidos se había dado tantos líderes militares de alto grado, aparentemente carentes de motivación política partidista, que sintieran la necesidad o la obligación de expresarse públicamente con respecto a la política y liderazgo durante un conflicto en curso.

La novedad de este suceso en medio del extenso debate acerca de las obligaciones y la naturaleza del profesionalismo militar clama por un análisis normativo. ¿Es tal criticismo, al menos en algunas interpretaciones de las circunstancias y los motivos de dicha crítica, de verdad una manifestación de los estándares más elevados del profesionalismo militar? O ¿es, por el contrario, un tipo de insubordinación reprobable y poco profesional a los líderes políticos debidamente elegidos y para las personas que ellos designan para desempeñar un cargo?¹¹

Es importante dejar de lado una serie de posibles preguntas distractoras antes de iniciar un análisis normativo de este asunto. En primer lugar,

no hay duda alguna del derecho legal de facto de dichos funcionarios para decir lo que les plazca.¹² De facto porque, según lo que Richard Swain ha sostenido recientemente, los oficiales retirados, en vista de que técnicamente forman parte de la institución castrense y reciben una jubilación militar, podrían discutiblemente estar obligados por exactamente las mismas normas a las que se adhieren los oficiales en el servicio activo. Sin embargo, jamás ha habido ninguna inclinación de tomar esa perspectiva del asunto por parte de la comunidad legal. En primer lugar, en calidad de oficiales retirados, recuperan plenamente las libertades de la Primera Enmienda que son necesariamente un tanto restringidas mientras se encuentran en el servicio activo. En segundo lugar, ver a oficiales generales retirados que usan su poder moral y político para influir en asuntos políticos se ha convertido en un suceso diario. En los últimos años, cada candidato presidencial ha organizado el respaldo de oficiales retirados de alto grado. Sin duda, se podría argumentar que, si es permisible que los oficiales retirados usen su condición de esta manera para un respaldo político partidista generalizado, pero sería bastante más adecuado que criticaran a los líderes políticos y las políticas que se concentran básicamente en áreas de su específica experiencia militar.¹³

Muchos observadores han criticado, hasta no decir, a esos oficiales retirados en innumerables ocasiones. El Dr. Don Snider, en una charla inédita en West Point, argumentó que tal criticismo socava la confianza de los jóvenes oficiales, quienes podrían pensar “De verdad así era como se sentía cuando yo peleaba por él en la Operación Iraqi Freedom, y de ser así, por qué no renunció en ese momento?”¹⁴

Incluso, en tono más mordaz, el Dr. Snider citó la afirmación clásica de Samuel Huntington de que los militares deben mantenerse completamente al margen de los asuntos políticos, y afirmó que la rebelión de los generales “...presenta a la profesión del Ejército y a su actual liderazgo estratégico (demasiados tímidos para dar su opinión como nosotros lo hacemos) de manera muy negativa”.¹⁵ En esta evaluación, las críticas del general retirado cruzan la línea que determina el juicio político de la experiencia militar adecuada que debe, según la evaluación de Snider, ser una distinción sostenida y clara.

Por último, antes de pasar a un análisis normativo del problema, es importante reconocer y tratar de dejar de lado los juicios políticos específicos con respecto a la guerra en Irak. Ahora, después de que Estados Unidos ha pasado siete años en el conflicto, evidentemente casi todas las bases en las que se fundaron las presunciones (tanto en términos de justificación de causas como la predicción de cómo se desarrollaría) han demostrado ser incorrectas, dejándoles a los historiadores del futuro la tarea de determinar qué proporciones tuvieron que ver con auto decepción, duplicidad o verdadero error.

Otros, por supuesto, han juzgado y juzgarán estos asuntos de distintas maneras. Si bien es importante reconocer que ese juicio y los sentimientos que el mismo genera son sumamente conflictivos para la sociedad estadounidense, el objetivo de este artículo no es el de criticar o el de defender juicios específicos. En su lugar, la tarea en curso es intentar, incluso en medio de pasiones políticas, ampliar el pensamiento normativo con respecto al profesionalismo militar que ha avanzado tan beneficiosamente en los últimos años.

Hacia un análisis normativo

En principio, una manera de intentar abordar un problema, es estructurarlo como una situación hipotética. Evidentemente, es importante que lo especulativo sea plausible en términos del mundo real y más allá, pues este debate surge de eventos específicos, que es por lo menos una interpretación posible de esos sucesos. Por otro lado, la ventaja de la estructura hipotética del asunto es que nos permite afirmar el asunto como una cuestión de términos de principios, en lugar de atascarnos con cada detalle de personalidades y sucesos específicos.

Supongamos que usted es un General quien ha dado frecuentes y repetidos asesoramientos con respecto a la viabilidad de las metas operacionales y estratégicas. Suponga que su consejo es inflexible en cuanto a que las metas perseguidas no pueden obtenerse por medios militares que los líderes civiles están dispuestos a comprometer, o que no se pueden obtener (en su opinión) en lo absoluto por medios militares. Por supuesto, se pueden desplegar fuerzas en búsqueda de esos objetivos. Es sólo que, en su opinión, todos

los esfuerzos serán inútiles. Especialmente, su consejo sobre el tamaño y composición de la fuerza necesaria para tener alguna esperanza de alcanzar las metas establecidas es completamente ignorado a fin de favorecer un empleo que usted considera condenado al fracaso.

Una vez que quedó claro que el liderazgo político opinaba de otra manera, usted saludó inteligentemente e hizo lo mejor que pudo para llevar a cabo la orden de la Administración. Ahora han pasado un par de años desde que se llevó a cabo ese despliegue y se encuentra frente a una situación de “se los dije”. Ahora está más convencido que nunca de que sus opiniones iniciales estaban correctas.

Al principio, usted se dijo así mismo, “puedo estar equivocado”, y “tal vez los líderes políticos saben algo que yo no sé”. A estas alturas, es evidente que estaba en lo correcto y que el liderazgo político, de hecho, no sabía nada que hubiera podido hacer cambiar su opinión.

Así es que, en su opinión la continuidad de la política actual jamás logrará las metas políticas y resultará en el continuo aumento de bajas y en la degradación del equipamiento, apresto, etc., del servicio. Además, usted está consciente de otras amenazas que, en vista de que está comprometido con ésta, no podría de ninguna manera encontrar los recursos indispensables para lidiar militarmente con las mismas, ni siquiera si tuviera que hacerlo.

En tal circunstancias, ¿qué hace? ¿Opina lo mismo que McMaster sobre los Jefes de Estado Mayor Conjunto en Vietnam? ¿Cuáles son sus opciones? Usted puede seguir cumpliendo la orden, metiéndose más de cabeza en lo que usted considera una situación imposible. Usted no puede criticar abiertamente la política mientras usa un uniforme salvo, quizás, mediante el uso de sus oportunidades de testimonio ante el Congreso para dar sus opiniones sin tapujo alguno.

No hace falta decir que si el asunto en cuestión es sencillamente un manejo de desacuerdos sobre la política, no existe un dilema moral en juego. Sin embargo, si la política es, en su opinión analizada cuidadosamente, sobre un asunto de extrema importancia y amenaza con costos significativos y de largo plazo a los intereses militares, nacionales y de salud del cuerpo político, surge un dilema genuino.

Si usted se retirajubila, ¿podría de hecho ser parte de su obligación profesional permanente y su responsabilidad ante sus amigos y soldados aún en servicio activo intentar salir de esa situación? ¿No podría ser importante para la futura credibilidad de los militares y su liderazgo mostrar juicio profesional independiente en semejante situación, en lugar de aparentar estar de acuerdo, hasta que los historiadores documenten que los líderes militares eran también cómplice de las realidades que enfrentaron?

Estas son preguntas difíciles. Por otra parte, hay motivo para dudar el alegar que la insubordinación es la mejor opción, porque el riesgo es muy alto de que al hacerlo se interprete como permiso para que los líderes militares continuamente y en público difieran de las políticas de los líderes políticos electos. De manera que si se quiere hacer un caso de disidencia pública de cualquier tipo, tiene que ser respaldado con indicadores y precaución. Cualquiera de estos argumentos corresponde solamente a las situaciones más extremas donde, en el juicio concienzudo del líder superior, lo que está en juego es la seguridad vital de Estados Unidos y el proceso constitucional.

Según lo mencionado previamente, en un extremo del debate está la postura planteada por Richard Swain. Swain alega firmemente (y cita leyes) para establecer su punto de que los oficiales retirados, en todos los sentidos, siguen siendo integrantes de las fuerzas armadas. Señala de manera acertada que están sujetos a que se les vuelvan a llamar al servicio activo, reciben un salario en su condición de retirado y aún pueden ser nombrados a ocupar un cargo. Por consiguiente, alega que están sujetos exactamente a las mismas restricciones del personal en servicio activo. Swain escribió lo siguiente:

Es como mínimo una falsa alegación de que una vez retirados los oficiales vuelven a adquirir la plena condición de ciudadano civil en lo que concierne a las obligaciones a las que estaban comprometidos cuando estaban en el servicio. La condición de retirado no significa una renuncia de cargo. Es un asunto de hecho, no de interpretación, de que los oficiales retirados permanecen siendo integrantes de las fuerzas armadas



(Ejército de EUA, Sgto. Angelica Colindano)

El general de brigada Herbert R. McMaster (derecha), Director de Conceptos y Desarrollo y Experimentación en el Centro de Integración de Capacidades del Ejército del Comando de Adiestramiento y Doctrina actúa como moderador de un panel de discusión sobre el tema del Army Capstone Concept, 25 de febrero de 2010, en Fort Lauderdale, Florida.

por ley y reglamentación... A menos que como George Washington renuncien a su comisión, es sensato presumir que por lo menos permanecen éticamente obligados a observar las limitaciones impuestas por el servicio encomendado, aceptado por su juramentación y la comisión que todavía mantienen.¹⁶

Si bien Swain expone un caso legal sólido, evidentemente la práctica real tolera una latitud mucho más amplia en lo que toca a la conducta de los oficiales retirados que el estándar que él formula. Por otro lado, utilizado adecuadamente, los conocimientos especializados de los oficiales retirados que tienen más libertad de hablar sobre política que cuando vestían el uniforme aparece en balance un valioso recurso nacional para informar el debate público sobre esas

políticas. Al privar tal contribución, el país sólo tendría la postura del gobierno y la opinión de personas comparativamente sin experiencia de comentaristas civiles. Todo intento de hacer realidad el estándar de Swain es casi seguro que sería utilizado selectivamente por superiores civiles deseosos de silenciar las críticas de los oficiales retirados, mientras alientan a sus partidarios a seguir como defensores.

En el otro extremo se encuentra la opinión derivada de algunas interpretaciones del libro de McMaster. En este punto de vista, los líderes superiores quienes tienen fuertes perspectivas disidentes de la política de un gobierno tienen la obligación de hablar o de renunciar en señal de protesta. Decididos a jamás volver a ser el equivalente moral de los “cinco hombres silenciosos” del Presidente Lyndon Johnson

(como se le denominó al JCS), los defensores de este punto de vista evocan nuevamente las siguientes reflexiones retrospectivas del General Harold K. Johnson sobre su propio silencio:

Recuerdo el día que estaba dispuesto a ir a la Oficina Oval y entregarle al Presidente mis cuatro estrellas y decirle, “Usted ha rehusado decirle al país que no pueden pelear una guerra sin movilización; usted me ha pedido que envíe a hombres a una batalla con muy pocas esperanzas de ganar la misma; y nos ha obligado a que nosotros, los militares, quebrantemos cada uno de los principios de guerra en Vietnam. Por consiguiente, renuncio y le informo que sostendré una conferencia de prensa luego de que salga de su oficina”.¹⁷

Por supuesto, ni el General Johnson ni ningún otro alto dirigente hizo tal cosa durante la guerra de Vietnam. La lección que por lo menos muchos lectores piensan que aprendieron de McMaster es que, en caso de producirse acontecimientos equivalentes mientras estén desempeñando sus funciones, deberán estar dispuestos a presentar sus renunciaciones. Los comentarios de Shelton, previamente citados por el General Zinni, sin duda parecen dar a entender una disposición de su parte para tomar ese curso de acción, de presentarse la ocasión.

El capellán retirado de la Armada de EUA, Capitán George M. Clifford III intenta proporcionar el tipo de análisis ético minucioso que exige esta situación en particular. Distingue cuatro categorías de asuntos que podría plantear el tema de la disidencia en niveles crecientes de gravedad, a saber:

- Una responsabilidad asignada que el oficial puede desempeñar con mínima incomodidad.
- Una responsabilidad asignada que el oficial puede desempeñar solamente con considerable incomodidad moral.
- Una responsabilidad asignada que el oficial puede desempeñar solamente a costa de comprometer significativamente sus estándares morales.
- Una responsabilidad asignada que el oficial no puede desempeñar.

Los casos fáciles (al menos teóricamente) son los que se encuentran en la primera y en la última categoría. La primera categoría es

fácil debido a que la objeción del oficial no es moralmente significativa; la última es fácil porque se eleva a la categoría de “órdenes ilegales” las cuales se espera que los oficiales desobedezcan.¹⁹

Las categorías difíciles son la segunda y la tercera. Obviamente, no hay manera de delimitar notablemente entre estas categorías, y cada oficial trazará la línea en su propia vida y conducta de manera distinta. Clifford escribió lo siguiente: Probablemente Ningún oficial, de ningún grado, que posea un fuerte sentido de moralidad servirá por mucho tiempo sin que se le asigne una responsabilidad de la cual él o ella objete moralmente. Sin embargo, a menos que la situación implique graves consecuencias para los demás o para el país, la nación espera, como es debido, que los oficiales militares hagan su “trabajo” —V.gr., obedecer.²⁰ En otras palabras, si la dificultad moral permanece en la “segunda categoría” a nivel de oficiales, deberían subordinar su propio juicio moral a las necesidades de obediencia y buen orden.

El dilema planteado para la tercera categoría no puede descartarse tan alegremente. Si bien no hay una línea clara que indique cuándo un asunto está pasando al nivel de incomodidad, como Clifford observa, tiene que ver principalmente con “el grado y cantidad de daño u otro mal ocasionado por el cumplimiento de una responsabilidad asignada”.²¹ En grado mínimo, un oficial que encara un alto grado de perjuicio como resultado de una política que él o ella fuertemente desapruueba, tiene la obligación de hacer todo lo necesario para hacerse escuchar. Evidentemente, un oficial le debe lealtad a sus superiores civiles, sin embargo, hay otras lealtades que compiten también en el trabajo, por ejemplo: los subalternos militares, el bienestar de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y la percepción a largo plazo de la integridad moral de los servicios militares por parte de sus ciudadanos.

Desde luego, la “obligación de hacer todo lo posible para hacerse escuchar” debería, en casi todos los casos, ser una avenida adecuada de modo inequívoco. ¿Cuáles son esas? En privado con otros líderes de jerarquía superior se podría esperar y confiar el sostener una conversación sincera por parte de todos los participantes.

Obviamente (aunque en la práctica es más difícil de lograr) la sinceridad es adecuada ante los órganos del Congreso, donde se espera y se exige que los líderes superiores provean una evaluación militar honesta.²² En la situación ideal, todos los participantes saldrían de estas discusiones con la sensación de que han expresado sus opiniones, que han sido “escuchados” en el nivel adecuado y se sienten satisfechos de que aunque la decisión no fue a su favor, pudieron comprender y aceptar el análisis razonado.

¿Qué sucede en el caso de que no todo salga tan bien? En un artículo, los generales retirados Richard Myers y Dick Kohn alegaron que “no hubo tregua entre los militares y los civiles después de los acontecimientos del 9/11, porque jamás había habido una guerra. Fue sólo la fricción y desconfianza (jamás abierta sino exacerbada por el enfoque y estilo de Rumsfeld) inherente en las relaciones civil-militar”.²³

Claramente, los altos dirigentes que disintieron públicamente, no consideraron la situación de esa manera. Uno de ellos, en una conversación privada, la llamó una “crisis constitucional” y alegó que sólo esa grave situación podría haberlo motivado a quebrantar la abstinencia de auto expresión de los oficiales. ¿Qué tipo de desacuerdo podría justificar la conclusión de que la situación era tan extrema y colocar firmemente la decisión en la tercera categoría de Clifford de objeción moral?

El primer caso es tan extremo que se podría argumentar que cae en la categoría de orden ilegal —aunque no según la definición común de órdenes ilegales, para violar las reglas del derecho de guerra (*jus in bello*) de guerra justa. Los Juicios Nuerenberg (juicio que fue hecho después de la Segunda Guerra Mundial a los líderes nazis y criminales de guerra) destacaron tres categorías singulares de crímenes de guerra. Entre los más conocidos se encuentran las violaciones de la ley de la guerra y crímenes contra la humanidad. La tercera, crímenes contra la paz, se define como “(i) Planificación, preparación, iniciación o ejecución de una guerra de agresión o una guerra en violación de tratados internacionales, acuerdos o garantías; (ii) La participación de un plan común o conspiración para el logro de cualquiera de los actos mencionados en (i).”²⁴

Si bien resulta difícil saber con precisión qué quiso decir el Mayor General Greg Newbold, uno de los críticos, cuando describió a Irak como “una guerra innecesaria”, es razonable interpretarlo como si hubiera dicho que su participación prolongada en la planificación de la guerra significaba que tomaba parte en un crimen de este tipo. El análisis, con propósito de análisis moral, no tiene que determinar si él o ella coinciden con esa evaluación, sino solamente que (si esta es la interpretación correcta) el General Newbold considera sinceramente que es el caso. El que nadie en el gobierno estadounidense probablemente sea enjuiciado por tal crimen en el ambiente geopolítico actual es también irrelevante. Se puede ver por qué un oficial quien cree que la situación se aproxima a este nivel estaría, como mínimo, en las tres categorías de aflicción moral de Clifford.

Otra área donde el disentimiento público debe ser, por lo menos, considerado, de ser apropiado, es el caso donde un oficial es lo más consciente posible de los detalles del plan de guerra y, en el ejercicio pleno de su juicio militar profesional, cree honestamente que el plan tendrá resultados desastrosos para el país y para las fuerzas que



El general de división Gregory S. Newbold, Cuerpo de Infantería de Marina.

están por ser empleadas. Esto no es un asunto de que el plan tenga ciertas fallas o puntos débiles. En su lugar, el caso tiene que parecer, lo más posible, (por un argumento el cual es inherentemente un asunto de criterio profesional) a una receta para el desastre de conformidad con todo principio de juicio militar profesional disponible para el oficial. Aquí, seguramente, si el estándar para los oficiales es el de ejercer el juicio profesional en lugar de caer en el rol de burócratas sencillamente obedientes, este es el momento donde se espera que los oficiales no participen voluntariamente en la ejecución del plan.

Los oficiales tienen la creencia sincera (aún cuando sea objetivamente desacertada) de que están en tal situación que justifica aprovechar la oportunidad de dejar su puesto (de ser permisible por ley). A nivel de oficiales superiores, es aparente que las jubilaciones solicitadas por tal motivo, por lo regular, sean otorgadas — aunque sea sólo por la razón práctica de que a nadie le gustaría que un oficial llevara a cabo un plan al cual no le tiene fe.

¿Qué hay sobre el último paso: criticar públicamente a los líderes y planes desde el nuevo puesto adquirido de oficial retirado? Todo fundamento que sustente esto, evidentemente, es elaborado de mala gana por todas las razones de primera que citan los críticos de la “rebelión de los generales”. Una regla incontrovertible contra tal anunciación, no obstante, se niega frente a cualquiera noción de responsabilidad moral fundamental y de lealtad al país y a la Constitución. Evidentemente, puede que no haya reglas algorítmicas para determinar el umbral adecuado para tan singulares desacuerdos. De hecho, el capellán Clifford, pasa a un análisis de las virtudes de prudencia, valentía y templanza en un intento por guiar tales elecciones, y al fin y al cabo, coincide con las alegaciones de Aristóteles de que tales virtudes permanecen vigentes. No hay reglas para ellas, salvo “reconocemos la virtud cuando la vemos”.

Es en este tema Clifford encuentra errado al General Newbold. Clifford escribe lo siguiente: “La decisión de jubilarse del General Newbold en 2002 ejemplifica la inadecuación de la opción de simplemente jubilarse. Su retiro no ocasionó ninguna oleada y por lo visto no incitó una

reevaluación de las políticas y planes con los cuales él desavenía con tanta vehemencia.

En su lugar, Clifford alega lo siguiente:

Si (Newbold) hubiera podido presentar un caso convincente contra las políticas y planes que encontró moralmente objetables sin revelar información clasificada, entonces, dada la magnitud de los asuntos en juego, debió haber (renunciado y hacerse escuchar), en su lugar (sencillamente se jubiló). Ese fracaso señala las ineficiencias en uno o más de estas tres virtudes, a saber: prudencia (carencia de sentido común para ver la plétórica importancia de los asuntos cuando se jubiló), valentía (demasiado lengüicorto), templanza (demasiado preocupado sobre el puesto que ocupaba dentro del equipo o influencia que pudiera ejercer en el futuro).²⁶

Si bien, como quien dice, un juicio severo, todo en el argumento que llegó a este punto lo sugiere correcto. El aprobar semejante postura es correr un gran riesgo de parecer autorizar la insubordinación siempre que surja una desavenencia con respecto a la política. Francamente, esa no es la intención, y el autor ha alegado en alguna otra parte contra tal disenso.²⁷

En toda profesión, surgen circunstancias en donde las consecuencias negativas y claramente previsibles de adherirse a las reglas profesionales son tan grandes que la mesura espera que esas reglas sean segregadas. Por ejemplo, un caso de corte en California decretó que, si bien los psiquiatras tiene un requisito casi incuestionable de confidencialidad hacia sus pacientes, ese requisito debe segregarse cuando el advertirles a las potenciales víctimas de violencia puede salvar vidas, agregando un “deber de advertir” a los requisitos morales de la profesión.²⁸

Análogamente, si el componente intelectual del profesionalismo militar tiene algún significado, se circunscribe a casos poco comunes de juicios militares llanamente errados que garantizan funestas consecuencias. En tales casos, la obligación de los profesionales militares, precisamente porque son profesionales y no simplemente burócratas obedientes, necesita superar la conducta regida por las reglas derivadas de contextos más habituales. **MR**

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Snider, Don M. y Matthews, Lloyd J., eds., *The Future of the Army Profession* (2d ed.; Boston: McGraw-Hill Custom Publishing, 2005).
2. Abbott, Andrew, *The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor* (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1988).
3. Kohn, Richard, H., "Out of Control: The Crisis in Civil-Military Relations," *The National Interest*, p. 35 (primavera de 1994), págs. 3-17. Véase también Ulrich, Peterson, "Infusing Normative Civil-Military Relations Principles in the Officer Corps," in *The Future of the Army Profession*, págs. 655-82., Cook, Martin, L., "The Proper Role of Professional Military Advice in Contemporary Uses of Force," *Parameters*, p. 32 (Invierno de 2002-03), págs. 21-33.
4. El debate más amplio de esta pregunta puede encontrarse en Bush, Michael, C., "and the Generals," *Foreign Affairs*, p. 86 (mayo/junio de 2007) y en los artículos en donde se critican las obras de Desch en el "Salute and Disobey?" número de septiembre/octubre de 2007, edición de *Foreign Affairs* la cual contiene escritos individuales de Richard B. Myers y Richard Kohn (quienes desapruban las alegaciones de Desch por considerarlas exageradas), Mackubin Thomas Owens (quien defiende la complicidad deliberada de los militares en la mayoría de las presunciones deficientes del plan de Guerra de Irak), y Lawrence Korb (quien alega que el problema más grave es la tendencia de la Administración de Bush a usar a los militares como accesorios de escenario para sus políticas, criticando específicamente al General David Petraeus por publicar una página de tribuna en *The Washington Post* en el cual apoyaba las políticas del Presidente Bush en Irak en la víspera de las elecciones de 2004). Korb y Desch tienen razón en cuanto a que el asunto más grave es que los militares están siendo manipulados de una manera en donde "el apoyo de las tropas" pareció, en gran parte de este periodo, significar "no critiquen la política". Resulta difícil saber cómo puede ser esto controlado cuando el Comandante en Jefe solicita un fondo de soldados uniformados en un discurso.
5. Es importante observar que los generales Myers y Richard Kohn, en su crítica de *Foreign Affairs* de Desch, niegan contundentemente esta alegación. Cuanto más, alegan que, "...a menudo, el comandante combatiente encontró el fondo y el interrogatorio de los planes provenientes del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y de los Jefes de Estado Mayor de muy mal sabor. Sin embargo, al final, todas las personas involucradas en el proceso apoyaron el plan final indistintamente de los desacuerdos encarados en el proceso". "The Military's Place," *Foreign Affairs*, p. 86 (septiembre/octubre de 2007), p. 147.
6. Ulrich, Marybeth y Cook, Martin, L., "US Civil Military Relations Since 9/11: Issues in Ethics and Policy Development," *The Journal of Military Ethics* (forthcoming).
7. McMaster, H. R., *Dereliction of Duty: Lyndon Johnson, Robert McNamara, the Joint Chiefs of Staff, and the Lies that Led to Vietnam* (New York: Harper Collins, 1997).
8. "Comentarios del General Anthony Zinni, USMC, (Retirado) en la cena de la Junta de Directores de CDI, 12 de mayo de 2004, Centro para la Información de Defensa, 22 de mayo de 2004, <http://www.cdi.org/program/document.cfm?DocumentID=2208>. Es impactante ver cuán importante se ha convertido el libro de McMaster para todas las partes de este debate. Owens, en particular, culpa la actual confusión que hay entre las relaciones civil-militar en gran parte a lo que él considera una mala interpretación del libro, lo que lleva (alega) a una "creencia generalizada de que los oficiales deberían defender políticas específicas en lugar de sencillamente servir en sus funciones de roles tradicionales". "Failure's Many Fathers," *Foreign Affairs*, p. 86, (septiembre/octubre de 2007), p. 150.
9. Spiegel, Peter y Richter, Paul, "Anti-Rumsfeld Chorus Grows," *The Los Angeles Times*, 13 de abril de 2006.
10. Estos oficiales incluyendo al Brigadier General Charles Swannack, recientemente retirado del mando de la 82ª División Aerotransportada; Brigadier General John Batiste, ex comandante de la 1ª División de Infantería en Irak y por su ex asesor el Subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz en la concentración de tropas para la guerra; el General y ex Secretario de Estado Colin Powell; el Mayor General Greg Newbold, Director de Operaciones (retirado) de Estado Mayor quien se jubiló antes de tiempo debido a su oposición a la guerra y el Brigadier General Paul Eaton, a cargo del adiestramiento de la nueva fuerza militar iraquí. Además, el ex Comandante del Comando Central, General Anthony Zinni ha sido un acerbo crítico de la guerra desde su inicio, así como lo ha sido el Mayor General William Odom, ex Director de la Agencia de Seguridad Nacional y ex comandante del CENTCOM, General Joseph Hoare. A fin de cuentas, varios generales retirados específicamente solicitaron la renuncia del Secretario de Defensa Rumsfeld. Greg Jaffe, "The Two Star Rebel," *The Wall Street Journal*, 13 de mayo de 2006, A1.
11. Evidentemente, en vista de que todos los oficiales en cuestión están retirados, técnicamente no son considerados insubordinados dado que ya no están en la cadena de mando. El estatus profesional de los generales retirados (tal vez, especialmente los oficiales recientemente retirados que han ocupado puestos de crucial importancia de los cuales han observado de manera íntima la política e implementación) es una pregunta ética profesional importante. Francamente, la fuerza de sus críticas y el peso que ejercen las mismas con el público, los medios de comunicación y el Congreso proviene de sus previos estatus militares.
12. Hasta esto es cuestionable. El título 10 del Código de Estados Unidos claramente incluye a los integrantes retirados de la fuerza del servicio activo como integrantes plenos de la fuerza. No han renunciado a sus comisiones, y todavía están bajo la jurisdicción del Código de Justicia Militar. Sin embargo, a pesar de esto, no hay precedente que yo pueda señalar en lo que toca a disciplinar o acusar a un oficial retirado quien ha criticado a los políticos, las políticas o las prácticas de manera que evidentemente no serían permisibles si todavía vistieran el uniforme. Además, sería muy difícil acusar a un individuo sin dar la apariencia de una observancia selectiva de la ley, dada la prevalencia de los oficiales retirados que sirven como "consultores de informática" para el ciclo de noticias de 24 horas y, quizás más alarmantemente, usando su estatus de oficiales retirados como una plataforma para respaldar a candidatos políticos.
13. Por un lado, actualmente se podría cuestionar el sentido común que observan los oficiales al aprovecharse de su prestigio militar para intervenir a favor de la división política bimodal que involucra, en la mayoría de los casos, asuntos de los cuales no tienen experiencia alguna. Snider, en una charla inédita en West Point, comentó lo siguiente: "A menos que las ramas del servicio puedan auto vigilar a sus oficiales retirados a través de la persuasión moral, el riesgo de tal intensificada erosión de las normas morales civil-militar (un militar no partidista) es probable que, en algún punto, sean corregidos por medio de legislación que los militares, los retirados y en servicio activo no acogerán".
14. Snider, Don, mensaje al autor vía correo electrónico.
15. *Ibid.*
16. Swain, p. 19.
17. Citado en George M. Clifford III, "Duty at All Costs," *Naval War College Review*, 60 (invierno de 2007), p. 103.
18. *Ibid.*, p. 106.
19. Recalco que la categoría ilegal es "fácil" solo teóricamente. En la realidad, los militares hacen un trabajo mediocre cuando preparan al personal alistado a reconocer las órdenes ilegales, y hasta peor en elaborar estructuras para fomentar la desobediencia. El libro de Mark Osiel, *Obedying Orders: Atrocity, Military Discipline, and the Law of War* (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1999) es un excelente intento de aclarar distintas maneras en las que esto podría, sustancialmente mejorarse, mientras se mantiene el respeto a las necesidades de buen orden y disciplina.
20. Clifford, p. 108.
21. *Ibid.*
22. Un perfecto ejemplo de la complejidad de este problema en la práctica aconteció en septiembre de 2007 cuando el General Petraeus, al testificar ante el Comité de los Servicios Armados del Senado, el Senador John Warner le preguntó si el invadir a Irak había hecho a Estados Unidos un lugar más seguro. La respuesta cautelosa del General Petraeus se circunscribió a cómo manejar mejor el asunto inminente que le competía al tratar de lidiar con Irak. Evidentemente evadió la pregunta que el Senador Warner le había formulado: si las justificaciones estratégicas de trabar guerra con Irak fueron legítimas en primer lugar. En mi opinión, estuvo en lo correcto al tomar esa avenida, en vista de que invitaba a que se hiciera un juicio completamente retrospectivo sobre decisiones tomadas años antes de que la responsabilidad fuera suya. Resulta una pregunta interesante que si estaría dentro del alcance de la competencia profesional de un comandante combatiente regional, enfrentado a una pregunta similar por parte del Congreso en las vísperas de una operación militar, brindar una evaluación estratégica de la sapiencia por parte de la administración sobre el compromiso militar contemplado e inminente. El autor opina que sí.
23. Myers y Kohn, p. 147.
24. International Committee of the Red Cross, "Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Trial and in the Judgment of the Tribunal, 1950," <http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/390?OpenDocument>.
25. Clifford, p. 120.
26. *Ibid.*, p. 124.
27. Cook, Martin L., "The Moral Role of Professional Military Advice," in *The Moral Warrior: Ethics and Service in the U.S. Military* (Albany: SUNY Press, 2004).
28. *Tarasoff v. Regents of the University of California*, 17 Cal. 3d 425 (1976).